

El narcotraficante, que fue aceptado y luego expulsado del proceso de Justicia y Paz, reveló la alianza criminal con políticos, el despojo de tierras y la guerra entre bandos paramilitares en los Llanos Orientales.

El 3 de noviembre de 2009 todos los medios de comunicación estaban alerta. Ese día Daniel Rendón Herrera, conocido en el mundo de hampa como ‘Don Mario’, rindió su primera versión libre ante la Fiscalía 5 de la Unidad de Justicia y Paz. Sus confesiones prometían el encendido de un ‘ventilador’ sobre la violencia paramilitar ocurrida en los Llanos Orientales, cosa que sucedió pero que sólo caló en las primeras planas de la prensa al comienzo del proceso. Lo que vino después fue una serie de declaraciones que permitieron a investigadores y jueces armar el rompecabezas de una guerra que desplazó a 251 mil personas en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada desde 1997 a la fecha actual.

‘Don Mario’ hace parte de una extensa familia campesina criada en Amalfi, un pueblo antioqueño del que también son originarios los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño, y Miguel Arroyave. Bajo el pretexto de combatir a la guerrilla, con el brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fortalecieron su ‘negocio’ del narcotráfico en varias regiones del país. Fue tal su amistad con Vicente Castaño, que este lo envió como cuidador de sus ‘cocinas’ de droga en el Guaviare y en 2002 le encargó como co-equipero de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ en la jefatura del Bloque Centauros.

El caso de ‘Don Mario’ en el proceso de Justicia y Paz es particular. Pese a que mintió en el proceso de desmovilización al incluirse en los listados del Bloque Centauros como “patrullero” y no como el “jefe de finanzas” para seguir delinquiendo como narcotraficante en la región del Urabá, tras su captura en abril de 2009 el Ministerio del Interior aceptó que se beneficiara con la justicia transicional al considerar que era una pieza clave para desenmascarar el conflicto en el Meta. Esto porque la mayoría de los “altos mandos” de las Auc había sido extraditada en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Durante cuatro años el exjefe paramilitar rindió múltiples versiones a la Fiscalía y participó de varias audiencias en los tribunales en las que dio luces sobre la complicidad de las Auc con políticos y militares, el despojo de tierras y las guerras internas del paramilitarismo. Pero mientras ‘Don Mario’ colaboraba con la justicia, las autoridades sospechaban que desde la cárcel La Picota, de Bogotá, seguía dirigido el rearme de la banda criminal del ‘Clan Úsuga’. Y fue así como en

septiembre de 2013 fue expulsado de Justicia y Paz, y en diciembre de 2014 el presidente Juan Manuel Santos firmó su extradición a Estados Unidos.

Y mientras ‘Don Mario’ está ad portas de pasar sus días en una prisión en Estados Unidos para rendir cuentas por narcotráfico ante la Corte del Distrito de Nueva York, su hermano Jhon Jairo Rendón alias ‘Germán Monsalve’ paga una condena por lavado de activos en ese país y Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, otro hermano, está libre tras cumplir con los requisitos de la justicia transicional, según lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá.

“Sin militares ni políticos no hubiéramos existido”

Una verdad revelada en las declaraciones de ‘Don Mario’ fue la alianza criminal entre paramilitares y funcionarios públicos. Varias veces le aseguró a la Fiscalía que sin esa complicidad difícilmente hubieran crecido en hombres y armas. De los 80 paramilitares que los hermanos Castaño enviaron en 1997 desde Apartadó (Antioquia) a San José del Guaviare (Guaviare), el grupo llegó a sumar 2 mil 900 hombres al finalizar 2006. Desde su salida desde el Urabá y llegada al Llano las autoridades no tuvieron reparo. Según las confesiones de los exparamilitares, los dos aviones que los transportaron hasta las selvas del Llano fueron custodiados por la XVII Brigada del Ejército y la justicia condenó a los militares Jaime Humberto Uscátegui, Hernán Orozco y Lino Sánchez por no haber actuado para evitar la masacre de Mapiripán en julio de 1997.

‘Don Mario’ delinquiró en el Meta entre junio de 2002 y septiembre de 2004, y sentó su ‘base’ en el Ariari, una región integrada por siete municipios y con las tierras más fértiles del Meta al estar bañadas por los ríos Ariari, Guape y La Cal. Por orden del narcotraficante Arroyave, alias ‘El Arcángel’, su principal misión fue “reorganizar las finanzas” del grupo, por lo que implementó con más severidad el cobro del impuesto al gramaje (porcentaje por cada kilo de cocaína), ‘retenes’ ilegales, extorsiones a finqueros y comerciantes, el robo de 42 mil cabezas de ganado, la exigencia de porcentajes de la contratación pública así como de cupos del sistema subsidiado de salud Sisben para que sus tropas aseguraran la atención médica.

Eso fue posible con la complicidad de políticos y militares, quienes también dieron vía libre al exterminio de la Unión Patriótica (UP), el asesinato de otros líderes y políticos señalados de simpatizar con las ideas de izquierda, del asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate y del tráfico de armas.

Entre 1986 y 1988 los primeros paramilitares del Llano, venidos y financiados por

los narcotraficantes de Puerto Boyacá, asesinaron a 300 integrantes de la UP. Aunque en el Ariari el movimiento político quiso resistir, en 1999 prácticamente desapareció cuando Los Centauros atentaron contra la comitiva municipal de la Alcaldía del Castillo. Fue justo entre 2002 y 2004 que los desplazamientos aumentaron en este municipio con 4 mil 979 personas expulsadas, una situación que en parte se derivó de los “falsos positivos”.

‘Don Mario’ le juró a la Fiscalía que llegaron a un pacto con el entonces comandante del Batallón XXI Vargas, con sede en Granada, vecino al municipio de El Castillo, de “darles positivos” a cambio de que no hicieran operativos en su contra. Los desmovilizados creen que unos 200 militares participaron de esta tragedia, permitiendo el asesinato de por lo menos 100 civiles. Uno de ellos fue el joven de 17 años Eyder Quiguanás Rumiqué, quien se encuentra desaparecido después de que una patrulla de la Fuerza de Despliegue Rápido lo asesinara en la vereda La Floresta. Este Batallón fue señalado además de mantener a raya el suministro de armas y municiones de Los Centauros.

El exjefe paramilitar le dijo al organismo investigador que para las elecciones territoriales de 2003 el Bloque Centauros quiso lograr participación política, poniendo ‘fichas’ en concejos, alcaldías y la misma Gobernación, para lo cual el candidato a Euser Rendón (exalcalde de El Dorado) les sirvió de puente. Los paramilitares se convirtieron en la chequera de varias campañas políticas, en ‘la escolta’ de algunos candidatos y en el actor que intimidó a la población para forzar los votos en Villavicencio, Guamal, El Dorado, El Castillo y Granada. De ganar las elecciones, el político se comprometía a entregar el 10 por ciento de la contratación así como tres cargos en la Alcaldía para que las Auc controlaran las finanzas del municipio.

Ese ‘matrimonio’ entre paramilitares y políticos condujo por ejemplo al asesinato del personero Mario Castro Bueno, quien investigaba varios de los “falsos positivos” ocurridos en la región, y del presidente del Concejo José Alirio Bernal, ambos del municipio de El Castillo.

El poder está en la tierra

Fue después de una publicación de la revista Semana en enero de 2012, que ‘Don Mario’ comenzó a dilucidar otra parte del rompecabezas inconcluso de la guerra en los Llanos: la tierra. Hasta ese día las versiones libres de los desmovilizados estaban concentradas en la confesión de asesinatos, desapariciones y desplazamientos; pero no sobre el despojo de tierras. Bajo la sospecha de que las revelaciones de la

Revista hacían parte de un “complot” orquestado por su excolega alias ‘Pirata’, ‘Don Mario’ decidió en febrero de ese año destapar las cartas con la afirmación de que 12 mil hectáreas estaban en poder de los paramilitares.

El exjefe paramilitar aseguró que los paramilitares impulsaron la creación de varias sociedades y fundaciones en el municipio de Mapiripán, donde perpetraron la masacre en julio de 1997, para lograr la adjudicación de tierras de origen baldío como ocurrió con las fincas Los Agrados, que suman 4 mil 618 hectáreas, y Los Secretos, que suman otras 4 mil 655 hectáreas. Estas transacciones ocurrieron con la venia Maribel Mahecha, la entonces alcaldesa del pueblo (2008-2011), quien levantó las medidas de protección que tenían las fincas de Mapiripán después de la masacre para poder ser transadas comercialmente. En este periodo el gobernador era Edilberto Castro (2004-2006), señalado también por exparamilitares del Centauros de haber recibido apoyo en su candidatura.

En esa versión libre de febrero de 2012, ‘Don Mario’ aseguró además que varias de las fincas que “entregó” como parte de las confesiones de Justicia y Paz seguían en cabeza de varios exparamilitares, refiriéndose a la finca El Ocaso, en San Martín; un cooperativa creada para la producción de palma de aceite y unas viviendas que se hicieron en el barrio Obrero. El exjefe de finanzas dijo que los presuntos cómplices de ‘Pirata’ para esconder esos bienes eran José López Montero alias ‘Caracho’ y a Germán Ramírez alias ‘Vacafiada’, quienes hasta 2011 fueron integrantes de la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), así como Luis Árex Arango alias ‘Chatarro’ y José Vicente Rivera alias ‘Soldado’.

Aunque ‘Don Mario’ entregó un listado de por lo menos 15 fincas a Justicia y Paz, no contó en detalle cómo fue que se hicieron a éstas. En las audiencias las discusiones se limitaban a informar que los entonces funcionarios de Acción Social no habían actuado con celeridad para administrar estos bienes, varios se encontraban en abandono, el ganado se había perdido y aún no habían entrado al Fondo de Reparación de Víctimas. Pero detrás de estas tierras había una historia de despojo, no confesada por los paramilitares, que terminó siendo revelada por la Unidad de Restitución con la aplicación de la Ley de Víctimas.

En junio de 2015 el Tribunal de Restitución de Tierras de Bogotá emitió un fallo que le restituyó a dos familias sus fincas en el municipio de El Dorado, en Meta, colindantes a los predios Casa Roja y Casa Azul, desde donde ‘despachaba’ ‘Don Mario’. Los magistrados encontraron que el Bloque Centauros despojó a estas familias mediante presión, instalando en los predios ‘bases militares’, hospitales o

‘centros de operación’ y transfiriéndolos con escrituras en notarías. Los destierros ocurrieron cuando Euser Rendón era el alcalde (1998-2000) y las fincas despojadas fueron usadas como sedes de reunión entre políticos locales y paramilitares.

Las confesiones de ‘Don Mario’ dilucidaron la repartición de los Llanos Orientales entre jefes paramilitares y también guerrilleros: la zona del piedemonte, el corredor montañoso que conecta a Cundinamarca con Bogotá, fue controlado por los frentes 53 y 54 de las Farc en cabeza de Henry Castellanos, alias ‘Romaña’; la región del Ariari por ‘Don Mario’ y Géner García Molina, alias ‘Jhon 40’, quien fue jefe del Frente 43 de las Farc conocido como el ‘capo’ de esa guerrilla; los municipios de San Martín y Mapiripán por alias ‘Pirata’ y Vicente Castaño, de forma respectiva; la Altillanura por el grupo Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada o ‘Carranceros’, y el Casanare, por las Autodefensas Campesinas del Casanare en cabeza de alias ‘Tripas’ y ‘Martín Llanos’.

En febrero de 2014 la Contraloría publicó un informe en el que advirtió sobre 14 casos de acumulación de tierras de origen baldío en Meta, Casanare y Vichada a manos de particulares y empresas nacionales y multinacionales. VerdadAbierta.com encontró que en los Llanos las tierras fueron comercializadas después de la desmovilización paramilitar en 2006. Así documentó tres casos en el Meta, en los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, donde empresarios acumularon baldíos en terrenos donde los paramilitares del Bloque Centauros y ‘Carranceros’ habían perpetrado su violencia. El interrogante que deja abierta la confesión de ‘Don Mario’ es qué sucedió con las tierras en las que ellos rondaron o despojaron.

¿Quién manda a quién?

Algunos de los despojos ocurridos en el norte del Meta y el sur del Casanare fueron producto de una guerra interna desatada entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del Campesinas del Casanare. En una versión libre en noviembre de 2009, ‘Don Mario’ aseguró que el origen de esa disputa fueron comentarios del esmeraldero Víctor Carranza, quien sembró “cizaña” entre Miguel Arroyave, la cabeza del Centauros, y Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, jefe de los paramilitares en Casanare, de que uno quería matar al otro.

Cuando Arroyave le compró la “franquicia” de las Auc en los Llanos a Vicente Castaño las autodefensas de los Buitrago llevaban ya dos décadas en la región y lo que hicieron fue acordar las ‘fronteras invisibles’ sobre los territorios en que cada grupo delinquiría. Arroyave se quedaría con el Meta y ‘Martín Llanos’ seguiría en el

Casanare: cada quién con su zona. Pero según las confesiones de varios desmovilizados, Arroyave incumplió ese pacto, situación que terminó de agravarse con la cizaña de Carranza.

De esta forma, a finales de 2003 y mediados de 2004 ambos bandos se declararon la guerra. Mientras Los Centuros enviaron a la mayoría de sus integrantes al municipio de Barranca de Upía, en el Meta, los Buitrago lo hicieron en el municipio de Villanueva, Casanare. Los pobladores de esta zona le contaron a VerdadAbierta.com que los paramilitares se dieron bala noche y día. Según las declaraciones de ‘Don Mario’, en un mes, su grupo se gastó 14 mil millones de pesos en esa guerra y en un solo día utilizaron 100 mil tiros, gastando por lo menos 400 millones de pesos en munición.

Aunque no hay una cifra oficial relacionada con el número de muertos, los paramilitares calcularon que fueron 2 mil, cuyos cuerpos fueron cargados en “zorras” halados por tractores y desaparecidos en fosas. José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’, quien fue jefe paramilitar en el municipio de Aguazul, en Casanare, aseguró que para esa guerra fueron reclutados muchos niños y que en su caso reclutó a 30 de un solo tajo en la Semana Santa de 2004.

Esta guerra incluso trascendió a la capital colombiana. Los Centauros crearon el Frente Capital y Los Buitragueños el Frente República para saber cuál de los dos bandos ganaba el pulso de las extorsiones en los barrios populares, el comercio y las plazas de mercado en Bogotá.

Cuando Los Centauros se vieron ‘alcanzados’ en hombres y la posibilidad de perder la guerra, pidieron el apoyo de los demás tentáculos de las Auc como el Calima, el Bloque Central Bolívar, el Norte, el Vencedores de Arauca y el Mineros. Mientras esto sucedía, por aire las fuerzas militares atacaron El Tropezón, un caserío en Puerto López que ‘Martín’ convirtió en su trinchera. Así las Autodefensas Campesinas del Casanare fueron desvertebradas, los Buitrago, padre e hijos, huyeron y 79 de sus hombres fueron muertos. Otros 120 paramilitares bajo el mando de ‘Martín Llanos’ fueron presos. Todo sucedió mientras las Auc negociaban su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Euser Rendón, el político que según los desmovilizados fue su “mano derecha” en los Llanos Orientales, fue asesinado el 12 de septiembre de 2004 en Bogotá por orden de Miguel Arroyave. Considerando que su jefe “cometía excesos”, extorsionaba a los ganaderos de la región y además asesinaba para despojar

tierras, ‘Pirata’ y ‘Chatarro’ le contaron a la Fiscalía que el 19 de septiembre decidieron matar a su jefe.

Con la muerte de Arroyave se abrió un nuevo capítulo de las disputas internas por quién mandaba a quién entre los paramilitares del Llano. En la clandestinidad y reducidos por sus propios pares, Los Buitrago no quisieron hacer parte de la sigla Auc ni de las listas de desmovilización de 2005 y 2006. Como fueron de los pocos grupos que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz, las víctimas del Casanare han sido de las más excluidas de la justicia transicional, pues ni los desmovilizados confesaron sus crímenes y ni de momento, la Unidad de Tierras ha comenzado a documentar los despojos.

Por su parte Los Centauros se fracturaron en tres: el ‘grupo de los leales’ a Arroyave se desmovilizó en septiembre de 2005 bajo la firma de Vicente Castaño; y los dos grupos que participaron del asesinato del narcotraficante se autodenominaron ‘Héroes de los Llanos’ (al mando de ‘Pirata’) y ‘Héroes del Guaviare’ (al mando de ‘Cuchillo’). Ambos se desmovilizaron en abril de 2006.

De esas guerras quedaron paramilitares ávidos de continuar con el ‘negocio’ del narcotráfico y ‘Don Mario’ se escubulló hacia el Urabá buscando el apoyo de su hermano para después impulsar la banda criminal ‘los Urabeños’ junto a Juan de Dios Úsuga David alias ‘Geovanny’, quien fue muerto en 2012 en un operativo de la Policía, y a Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’, quien sigue prófugo. ‘Cuchillo’, quien se desmovilizó, se rearmó en el Guaviare y a punta de ‘cocinas’ hizo crecer a la banda que bautizó como Erpac. Murió en un operativo en diciembre de 2010 y la mayoría de sus hombres se entregó a la Fiscalía un año después. Aunque ‘Don Mario’ le juró a la justicia que él no seguía delinquiendo desde el pabellón de máxima seguridad de La Picota y que por el contrario, fue uno los exjefes paramilitares más dispuestos a confesar sus crímenes en Justicia y Paz, los investigadores siguieron sospechando y encontraron que seguía siendo sombra de ‘los Urabeños’. Por eso fue expulsado del proceso de Justicia y Paz en septiembre de 2013 y un año después la Corte Suprema avaló su extradición. En Colombia, ‘Don Mario’ dejó tres pistas para esclarecer el conflicto en los Llanos: la ‘parapolítica’, el despojo de tierras y el rearme.

<http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6016-don-mario-y-los-pactos-de-la-guerra>